



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
28 de abril de 2006
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

15º período de sesiones

Viena, 24 a 28 de abril de 2006

Proyecto de informe

Relatora: Carmen Lidia **Richter Ribeiro Moura** (Brasil)

Adición

Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal

1. En su octava sesión, celebrada el 27 de abril de 2006, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examinó el tema 8 del programa, titulado “Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal”. Para el estudio del tema tuvo a la vista los siguientes documentos:

a) Informe del Secretario General sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (E/CN.15/2006/13/ y Corr.1);

b) Informe del Secretario General sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2006/14);

c) Informe del Secretario General sobre la lucha contra la propagación del VIH/SIDA en los centros de prisión preventiva y los establecimientos penitenciarios del sistema de justicia penal (E/CN.15/2006/15);

d) Informe de la Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de elaborar un instrumento de recogida de información sobre las reglas y normas relacionadas principalmente con la prevención del delito, celebrada en Viena del 20 al 22 de marzo de 2006 (E/CN.15/2006/CRP.1);

2. La Directora de la División para Asuntos de Tratados y el Director Ejecutivo Adjunto, Director de la División de Operaciones de la ONUDD, formularon una



declaración inicial conjunta. La Comisión escuchó también las declaraciones del representante de Austria (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea) y del observador de Panamá (en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe). La Comisión escuchó además las declaraciones de los representantes de Alemania, el Canadá, Egipto, los Estados Unidos y la Jamahiriya Árabe Libia. Asimismo formularon declaraciones los observadores de Azerbaiyán, Argelia, Suecia y Australia. También hicieron declaraciones los observadores de la Sociedad Mundial de Victimología y la Sociedad Americana de Criminología.

Deliberaciones

3. La Directora de la División para Asuntos de Tratados presentó el informe del Secretario General sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (E/CN.15/2006/13 y Corr.1) que contenía un análisis de las respuestas recibidas de los gobiernos sobre la utilización y aplicación de las normas y reglas relacionadas principalmente con las personas detenidas, las sanciones no privativas de libertad, la justicia de menores y la justicia restaurativa. La oradora subrayó que el análisis de las respuestas recibidas mostraba que si bien algunas reglas y normas, tales como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o las relacionadas con la justicia de menores, eran conocidas en general por la mayoría de los Estados Miembros que contestaron y estaban incorporadas a nivel nacional, las que se referían a las sanciones no privativas de libertad y la justicia restaurativa eran menos familiares. Las respuestas recibidas mostraban también que probablemente eran poco conocidas las posibilidades de recibir asistencia técnica para la utilización y aplicación de las reglas y normas.

4. La oradora se refirió también a la resolución 2004/34 del Consejo Económico y Social, de 21 de julio de 2004, sobre protección contra el tráfico de bienes culturales, y a la petición en ella formulada de que se convoque, a reserva de la disponibilidad de fondos, una reunión de expertos encargados de estudiar y evaluar los problemas que se plantean y las dificultades que surgen en la lucha contra el tráfico de bienes culturales, señalando que la Secretaría estaba celebrando consultas con los gobiernos interesados para conseguir los fondos necesarios al efecto y renovando el llamamiento a los Estados Miembros para que consideren la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias destinadas a organizar esa reunión.

5. El Director de la División de Operaciones puso de relieve la constante propagación del VIH/SIDA en los centros de prisión preventiva y los establecimientos penitenciarios. En su calidad de copatrocinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y de organismo rector en cuestiones referentes al VIH/SIDA en las cárceles, la ONUDD ofrecía toda una gama de conocimientos especializados y servicios a los Estados solicitantes a fin de mejorar la situación en cuanto a prevención, cuidado y apoyo contra el VIH/SIDA en los centros de prisión preventiva y los establecimientos penitenciarios. El orador reseñó el programa cada vez más amplio de asistencia técnica ofrecido por la ONUDD, destacando en particular las misiones de asesoramiento, la facilitación de ocasiones de debate sobre políticas, la elaboración de materiales así como organización de seminarios de capacitación, y la prestación de apoyo a las actividades nacionales para realizar proyectos concretos.

6. Algunos oradores expresaron su respaldo a la función de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal como medio para reforzar el sistema de justicia penal de los Estados, en particular de los países en desarrollo y los países con economías en transición, así como en las situaciones posteriores a conflictos. Un representante declaró que una de las condiciones esenciales previas para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo o la corrupción era la existencia de un sistema de justicia penal equitativo, eficiente y eficaz, basado en el imperio de la ley y dotado de personal con capacitación adecuada en lo referente a reglas y normas en materia de prevención del delito y justicia penal.

7. Varios oradores informaron de las medidas adoptadas por sus Estados para aplicar las reglas y normas mediante la legislación nacional y la capacitación de los funcionarios judiciales y de aplicación de la ley. A ese respecto, se hizo especial referencia a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la sanciones no privativas de libertad (las Reglas de Tokio), así como a la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI y a la Declaración de Bangkok: Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal. Un orador declaró que los países en desarrollo adolecían de recursos para aplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas y solicitó asistencia técnica y financiera para garantizar la aplicación más amplia posible de esos instrumentos. En particular, subrayó la importancia de la Mesa Redonda para África, celebrada en Abuja los días 5 y 6 de septiembre de 2005 e instó a la comunidad internacional a proporcionar recursos financieros para posibilitar la aplicación del Programa de Acción 2006-2010 aprobado en esa reunión.

8. Varios oradores acogieron con beneplácito el examen de determinadas reglas y normas que lleva a cabo periódicamente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, considerándolo un proceso conducente al intercambio de información entre Estados sobre el uso y las aplicaciones de las reglas y normas y a la determinación de los ámbitos en que se necesitaban nuevos instrumentos. Sin embargo, algunos oradores se declararon preocupados por el gran número de cuestionarios detallados con que a menudo se recargaba a los gobiernos y por ello pedían que se racionalizaran las solicitudes de reunión de información enviadas a los Estados Miembros. Un orador destacó la importancia de celebrar reuniones de grupos intergubernamentales de expertos a fin de elaborar reglas y normas, así como proyectos de instrumento de encuesta, pero advirtió que las deliberaciones de esos grupos de expertos debían tener carácter informativo y no reemplazar las consultas con los gobiernos. A ese respecto, el orador subrayó el hecho de que los gobiernos, especialmente los que tenían sistemas federativos, requerían suficiente tiempo para consultar debidamente a los gobiernos estatales o provinciales, en los cuales recaía la responsabilidad constitucional respecto de gran parte del sistema de justicia penal.

9. Un orador celebró la labor realizada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en la esfera de la prevención del delito. Ese mismo orador señaló que era hora de intensificar las actividades de prevención del delito de la Comisión y que la elaboración de estrategias eficaces de prevención del delito podía contribuir de forma significativa a la reducción del delito y la victimización. La prevención del delito debía ser un componente natural e integral de los programas de asistencia

técnica proporcionados a los Estados Miembros, en los que se debían aprovechar las recomendaciones y las mejores prácticas basadas en conocimientos adquiridos. En ese contexto, se invitó a los Estados Miembros y a las entidades interesadas a que participaran en el Simposio sobre Criminología de Estocolmo que se celebraría en esa ciudad del 15 al 17 de junio de 2006.

10. Una observadora destacó que era importante atender a las necesidades de las víctimas y recordó que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal se había comprometido a apoyar la prevención de la victimización y la promoción de los principios de justicia para las víctimas. A ese respecto, invitó a los Estados Miembros a que organizaran una reunión de un grupo intergubernamental de expertos a fin de preparar recomendaciones orientadas a la acción sobre la mejor forma de aplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas relativas a las víctimas.

11. Otra observadora expresó su apoyo a las Directrices para la prevención del delito (resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo) y anunció que la organización que representaba, junto con la Alianza de organizaciones no gubernamentales para la prevención de la delincuencia y la justicia penal en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y los miembros de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, había empezado a preparar un informe sobre formas eficaces de aplicar las Directrices, lo que sería una contribución de asistencia técnica en especie a las actividades de prevención del delito de la ONUDD.

12. Muchos representantes observaron que habían aumentado considerablemente el robo y el tráfico de todo tipo de obras de arte y antigüedades, lo cual amenazaba con despojar a culturas y naciones enteras de su patrimonio cultural. Varios representantes se mostraron también alarmados por la participación cada vez mayor de grupos de delincuentes organizados en el robo y tráfico de bienes culturales.

13. Otros representantes suministraron información sobre las medidas legislativas y administrativas que se habían adoptado a nivel nacional para luchar contra el tráfico de bienes culturales, que abarcaban la capacitación de personal y el intercambio de información entre los organismos de lucha contra las actividades delictivas. A ese respecto, se señaló que al adoptar medidas a nivel nacional era apropiado combinar las medidas de represión con las medidas preventivas, incluida la vigilancia de los bienes culturales registrados. Un representante recalcó también la necesidad de que se prestara asistencia técnica a los Estados que carecían de la capacidad necesaria para encarar eficazmente el problema.

14. Varios representantes subrayaron la importancia de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes culturales, dada la índole transnacional de éste. A ese respecto, algunos oradores hicieron referencia a la necesidad de seguir promoviendo y aplicando eficazmente la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, así como la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 y sus dos protocolos. Se hizo también referencia, como otra manifestación de la voluntad política de los Estados Miembros de promover medidas eficaces a nivel nacional e internacional para garantizar una mejor protección de los bienes culturales, a la Declaración de El Cairo sobre la protección del patrimonio cultural, elaborada por la conferencia internacional celebrada en El Cairo en 2004 con ocasión del 50º aniversario de la Convención de 1954.

15. Muchos oradores estimaron que la convocación de una reunión de un grupo de expertos sobre protección de bienes culturales susceptibles de tráfico era una iniciativa necesaria para evaluar de manera más completa los parámetros esenciales del problema y formular recomendaciones sobre la adopción de medidas legislativas y administrativas apropiadas a fin de contrarrestar eficazmente ese fenómeno.

16. Alarmados aún por la continua difusión del VIH/SIDA en las instalaciones de detención preventiva y los establecimientos correccionales, varios oradores expresaron su apoyo a la ONUDD por la labor que realizaba en esa esfera. Muchos oradores observaron también que la ONUDD estaba en condiciones de ofrecer una amplia gama de conocimientos especializados y servicios en respuesta a las solicitudes cada vez más frecuentes de asistencia técnica. Se señalaron además las necesidades especiales de los grupos vulnerables, como las reclusas, los niños y los jóvenes. Dado que el ONUSIDA y otras entidades de las Naciones Unidas también prestaban asistencia técnica en la esfera de la prevención del VIH/SIDA, se alentó a la ONUDD a que siguiera realizando actividades conexas en el marco de su mandato.

17. Varios oradores reconocieron que, a fin de limitar la difusión de la pandemia, había que esforzarse por reducir el hacinamiento en las prisiones y frenar la violencia. A ese respecto, algunos Estados ofrecían actividades y programas educativos a fin de crear un entorno propicio para fomentar una cultura contraria a la violencia.

18. Varios representantes acogieron con beneplácito la labor realizada por la ONUDD a fin de aplicar la resolución 2004/35 del Consejo Económico y Social de 21 de julio de 2004, así como las recomendaciones del Grupo mundial de tareas para estrechar la coordinación entre los donantes multilaterales y los donantes internacionales en relación con el SIDA. Reconociendo la importancia de coordinar y racionalizar la respuesta mundial al VIH/SIDA, muchos oradores expresaron su pleno apoyo a la designación de la ONUDD como el principal organismo del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente al problema del VIH/SIDA en las cárceles.

19. Se destacó nuevamente la importancia de brindar a los reclusos acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención y a la educación en materia de salud, así como de impartir formación al personal penitenciario.

20. Un representante puso de relieve las actividades nacionales en curso en pro de la reforma de la justicia penal, incluidas medidas concretas para hacer frente a la situación del VIH/SIDA en entornos penitenciarios, así como las iniciativas de prevención, atención y tratamiento. Se observó además que la legislación nacional preveía una variedad de opciones para abordar el problema del hacinamiento en las cárceles.

21. Otro representante se refirió al Programa de Acción para África, 2006-2010, observando que la gestión de enfermedades infecciosas como el VIH sólo podría alcanzarse mediante la puesta en práctica de una gama de estrategias de prevención, tratamiento y reducción de los daños. El control y la gestión de las enfermedades infecciosas en los establecimientos penitenciarios era esencial para proteger la salud de los reclusos, el personal penitenciario y, en última instancia, la comunidad. Un representante expresó también su apoyo al Programa de Acción como medio de

ampliar la capacidad nacional en varias esferas, incluida la respuesta al VIH/SIDA en las cárceles.

22. Recordando la vinculación entre el consumo de drogas por inyección y la propagación del VIH/SIDA, un representante reiteró la necesidad de contar con programas educativos y de prevención, acceso a las pruebas de detección del VIH y tratamiento y formación del personal penitenciario.
